

## LOS IMPEDIMENTOS ECONOMICOS NACIONALES

David Ibarra

Enero-junio 2013

Configuraciones 34

Pese a costosos ensayos, la economía mexicana se debate sin solución de continuidad a mitad de camino entre patrones disímiles de desarrollo y dentro de una prolongada crisis del orden económico internacional. El modelo socioeconómico que aún se trata de implantar en nuestro país -Estado mínimo y mercados libres-, acotan la participación y debates sustantivos al empobrecer el poder decisorio de gobierno y sociedad. Cuando se responsabilizó a la banca central del objetivo único o medular de resguardar la estabilidad de los precios de consumo final -no de los activos, como demuestran las burbujas inmobiliarias-, cuando se les inhibió o prohibió prestar a los gobiernos -separando drásticamente la política monetaria de la fiscal- y cuando se les alejó de la regulación de los sistemas e instituciones financieras, se cumplió el triple propósito de liberarlos de las demandas de los gobiernos, de los controles democráticos y, a los mercados financieros, de las regulaciones estatales. En efecto, uno de los mayores logros -o maleficios- del paradigma económico internacional en boga, fue el de haber reinstalado, sin decirlo, junto a la apertura de mercado, la camisa de fuerza de las rigideces financieras del patrón oro sobre las políticas nacionales.

A los países periféricos sólo se les dejó -y aceptaron en su mayoría- el recurso único de instrumentar reformas microeconómicas o microsociales, frecuentemente incapaces de garantizar el crecimiento y la difusión del bienestar entre la población. El Estado-nación fue despojado de sus atribuciones de antaño. Funciones y prerrogativas - sobre todo macroeconómicas- se las apropian los bancos centrales independientes - formalmente parte del propio Estado-, los poderes extraterritoriales y los poderes fácticos nacionales. La política resulta en buena medida expropiada por los dictados inapelables de paradigmas e intereses económicos en buena medida extraterritoriales.

Además, cualquier intento de recuperar la autoridad gubernamental perdida, resulta penalizada por los mercados con el fantasma de la fuga de inversionistas que se invoca ante cualquier intento de alterar el *status quo*.

Las reglas del orden económico internacional prescriben la apertura externa, la privatización de empresas públicas y proscriben los subsidios y apoyos de fomento a la política industrial entre muchas otras exigencias que erosionan la soberanía de los gobiernos. La renuncia al uso del viejo y nuevo instrumental desarrollista se perfecciona con la globalización concebida como el proceso de instaurar un orden financiero y productivo supranacional, también más allá de las políticas nacionales. La desconfianza elitista propia y ajena en la democracia, en el gobierno de los hombres, se completa poniendo fe reverencial en los mercados, como si éstos no fuesen también una imperfecta construcción humana.

Por eso se ha recurrido a trasvasar responsabilidades a los mercados y a erigir a los medios masivos de comunicación privatizados en poder, capaz de informar pero también de ocultar, falsear o convertir en virtud, desequilibrios sociales y políticas inequitativas de ajuste económico. Poca influencia tiene la población y pocos alcances la democracia participativa cuando las políticas desatienden las demandas del 50% de la población pobre, del 60% de los trabajadores del sector informal o de los siete millones de jóvenes que no estudian ni trabajan.

Como resultado, el mercado interno queda constreñido y el ritmo de crecimiento se reduce a la mitad, se torna más volátil, menos propio, de compararse los períodos 1945-1980 y 1980-2010, mientras se acentúa el rezago en las comparaciones internacionales. El descontento de jóvenes y viejos, va en ascenso. La vulnerabilidad frente a las oscilaciones de la economía internacional queda evidenciada con la década perdida de los ochenta o con las crisis de 1987, de 1995, de 2001 y de 2008-2009. En el ámbito de la economía subsisten errores y desequilibrios que al retroalimentarse mantienen postrada a la producción y al empleo o producen recesos repetitivos. Las principales fallas de las políticas públicas residen en su insuficiencia, aislamiento y falta

de congruencia interna, en haber olvidado a lo largo de más de un cuarto de siglo las prioridades del empleo, del crecimiento y de la formación de capital, mediante el expediente de transferir tareas gubernamentales esenciales a los mercados en materia de planeación, asignación de recursos o de protección social a la población.

Así, la macroeconomía queda empobrecida, despojada de sus objetivos e instrumentos medulares. La estabilidad de precios priva sobre el crecimiento; el banco central independiente usa el tipo de cambio y sus poderes regulatorios con fines también estabilizadores. La política fiscal resulta inhibida por la insuficiencia de ingresos tributarios y por la obligación legal de rehuir cualquier déficit presupuestario.

Quizás se ganaron ventajas políticas al desviar a mercados impersonales los reclamos de la sociedad derivados de los ineludibles costos del acomodo al orden económico neoliberal y del cuasi-estancamiento consiguiente. Sin embargo, la evasión de lo política ha gestado desequilibrios mayúsculos que tienen postrada a la sociedad. Valga mencionar algunos casos conspicuos.

Uno es de orden estructural, se caracteriza por un proceso incompleto de modernización y adaptación de la planta productiva vernácula al libre comercio que escasamente contribuye al desarrollo. El segundo desequilibrio es financiero y tiene efectos similares. Ante la indiferencia de las autoridades, la banca casi ha abandonado el crédito a la producción y a la formación de capital. El Banco de México cuida de la estabilidad de precios, pero descuida el crecimiento de la economía, así como la regulación apropiada de la banca extranjera o nacional. A la par, la política fiscal quedó empequeñecida, cuando se desgravó sustantivamente el Impuesto sobre la Renta y se suprimieron los gravámenes al comercio exterior, hasta dejar como única salida la expoliación de las finanzas de PEMEX en sustitución de una reforma tributaria siempre pospuesta y frente a las restricciones de la Ley de Responsabilidad Hacendaria que obliga al equilibrio presupuestal casi en cualquier circunstancia.

El tercer desajuste es de orden social consiste en la violación ostensible del pacto social y en el resquebrajamiento del mercado de trabajo, en hacer crónica la desigualdad distributiva y en la aglomeración de perdedores en la justa de la competencia. El último desequilibrio se expresa en la segmentación de las fuerzas políticas, nacida de razones ideológicas, pero sobre todo de la cerrada defensa de privilegios elitistas que han impedido fijar prelación sobre los objetivos nacionales, dejando esos temas macroeconómicos esenciales al mercado. La pobreza y carencias sociales del grueso de los ciudadanos, el exilio forzado de millones de indocumentados mexicanos en los Estados Unidos, el costoso salvamento y la extranjerización de la banca, reflejan incontrovertiblemente fallas severas de nuestro régimen político que niega influencia a los segmentos mayoritarios de la población.

Entre los desequilibrios resultantes destacan dos -el del sistema financiero y el del mercado de trabajo- por sus efectos generalizados sobre el aparato productivo y el bienestar social. El primero, además de lo dicho, refleja la incapacidad de la política monetaria y bancaria para cumplir funciones indispensables de apoyo financiero a los productores nacionales o a la formación de capital. La reprivatización-extranjerización de la banca comercial y la inhibición al crédito de primer piso a la banca estatal, son causa de la ruptura de nexos entre economía, financiamiento e impulso estatal al crecimiento. La cartera conjunta de la banca comercial y la de desarrollo se ha desplomado del 63% al 21% del producto entre 1995 y 2008, uno de los más bajos coeficientes de intermediación bancaria del mundo. La banca comercial ha disminuido en 33% su cartera real de crédito, particularmente al sector privado a pesar de las garantías y redescuentos que le otorgan los bancos estatales. Por su parte, la transformación de la Banca de Desarrollo en banca de segundo piso, la orilla a renunciar a dos de sus funciones centrales: el crédito directo, competitivo, al sector privado y la preparación de los grandes programas o proyectos nacionales de inversión. Asimismo, la acumulación antiinflacionaria, precautoria o quizás antidesarrollista de reservas de

divisas del Banco de México tiene un alto costo financiero que ya disuelve casi por entero su capital social.

La erosión universal de los mercados de trabajo, alcanza en México proporciones alarmantes. La población económicamente activa creció 140% entre 1980 y 2008, esto es, a una tasa media anual mayor al 3%. En contraste, más de la mitad de la fuerza de trabajo es informal y el empleo en el sector secundario que podría tomarse como el segmento moderno de la economía de mercado, vio declinar su participación dentro de la población activa en casi 60% entre 1990 y 2008, con evidente desperdicio del llamado bono demográfico.

Como es natural, el costo de la estrategia adoptada creó vulnerabilidades sin cuento. Visto más de cerca, en 1995 el producto cayó más del 6% y, otro tanto, ocurre en 2009. Por supuesto, el consumo privado y la inversión se contrajeron todavía más, arrastrando consigo al bienestar ciudadano. La incierta mejoría macroeconómica postcrisis no es general y menos suficiente, no compensa del todo la caída de 2009 sobre todo en el empleo, cuando ya se perfila una nueva pérdida de dinamismo económico; el consumo y el empleo de la población seguirán deprimidos y por tanto las ramas productivas más afectadas son las que se asocian a la demanda popular y a la inversión, esto es, a la salud intrínseca de los mercados nacionales. Y ello ocurre cuando proliferan vicisitudes internacionales derivadas de la doble recesión europea y de las lentas, difíciles, recuperaciones norteamericana y japonesa que ya parecen arrastrar consigo a las principales economías emergentes, China, la India y Brasil, entre otras.

En México, la apertura de mercados tampoco ha clausurado los desequilibrios externos de pagos por más que se hayan multiplicado los tratados de libre comercio. Las exportaciones han crecido mucho desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero las importaciones lo han hecho a velocidad análoga o superior.

En consecuencia, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos y la afluencia del ahorro externo siguen determinando el ritmo máximo asequible de desarrollo.

En suma, junto al estrangulamiento externo, el énfasis en soluciones de mercado, en la estabilidad de precios, en políticas segmentadas y en extremo conservadoras, seguirá produciendo ritmos mediocres de crecimiento, costos ascendentes de sostenibilidad ambiental, mientras toma carta de naturalización la pobreza, el desempleo, el ascenso de la informalidad con cifras de desocupación de los jóvenes peligrosamente altas.

Haciendo a un lado avances en materia de inflación o de equilibrio presupuestal, cabría concluir que las cuestiones medulares a la salud de la economía y a la protección social reciben atención desordenada o secundaria en la confección de las políticas gubernamentales. Entonces, la conclusión general es evidente. En tanto, las políticas públicas sigan configurándose en compartimentos estanco, sin una visión de conjunto que las ordene, interrelacione y refuerce en torno a propósitos nacionales bien jerarquizados, tanto la política productiva, como la política social, quedarán truncas, incapaces de satisfacer sus propios objetivos y de contribuir a los de alcance superior.

Cuanto antes, cabría, erradicar el carácter ritual, carente de sustancia, de la planeación periódica del desarrollo nacional, así como los desacreditados simplismos económicos todavía en boga: los mercados liberados sobre todo los financieros son eficientes y capaces por sí mismos de disolver los obstáculos al crecimiento y a la justicia distributiva; abatir la inflación conduce invariablemente al crecimiento; reducir los salarios o los derechos laborales necesariamente aumentan el empleo; alentar el ahorro, automáticamente acrecienta la inversión y el propio ahorro.

Peor aún, la concepción neoliberal ha pretendido sustituir con pretensiones desorbitadas de validez universal e histórica a los ideales de la filosofía de la ilustración (conocimiento de la realidad, sociedad justa, prevalencia de los valores colectivos) por el individualismo sin trabas, por el mínimo de Estado y sociedad, por la competitividad como valor supremo.

De aquí que en México las reformas calificadas de estructurales -laboral, energética, fiscal, educativa- tal y como se les ha venido publicitando (hasta 2012), tendrían escaso impacto en destrabar el desarrollo nacional, generar empleo y reemplazar a una macroeconomía bien concebida de desarrollo, más puntualmente, la flexibilización contractual del trabajo no acompañada del seguro de desempleo, la universalización paulatina de los accesos a servicios básicos -salud, jubilaciones- ni de la democratización sindical o del fortalecimiento de la negociación colectiva, lejos de fortalecer al mercado interno y a la representatividad política de los trabajadores, mucho contribuirá a precarizar los salarios y la seguridad del trabajo, a concentrar la distribución del ingreso y poco a multiplicar la oferta de empleos en el sector moderno de la economía, como lo demuestran inequívocamente las experiencias de las más diversas latitudes; la reforma energética, sin liberar a PEMEX de una carga impositiva confiscatoria mediante una remodelación fiscal de fondo, tampoco serviría de mucho, excepto para privatizar -quizás extranjerizar- por pedazos los activos y operaciones de la empresa nacional más importante que técnicamente debiera preservarse integrada y, de paso, debilitar después las fuentes de ingreso de la federación; una reforma tributaria concebida en torno a la generalización del IVA a alimentos y medicinas, sin elevar la progresividad del Impuesto Personal a la Renta y sin precisar antes las grandes demandas del gasto desarrollista -en formación de capital y programas sociales-, poco contribuiría a regenerar la hacienda pública, vigorizar el financiamiento al desarrollo y distribuir mejor el ingreso; la reforma educativa podría servir a muchos objetivos valiosos e inobjetables pero está fuera de sus alcances desatar el empleo, cuando ya es redundante la oferta de personal educado por la falta de crecimiento y por el desquiciamiento del mercado de trabajo.